

Expediente Núm. 69/2019
Dictamen Núm. 115/2019

V O C A L E S :

Sesma Sánchez, Begoña,
Presidenta
González Cachero, María Isabel
Iglesias Fernández, Jesús Enrique
Menéndez Sebastián, Eva María
García García, Dorinda

Secretario General:
Iriondo Colubi, Agustín

El Pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2019, con asistencia de las señoras y el señor que al margen se expresan, emitió por unanimidad el siguiente dictamen:

“El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a solicitud de esa Alcaldía de 27 de febrero de 2019 -registrada de entrada el día 19 de marzo de ese mismo año-, examina el expediente relativo a la revisión de oficio de la adjudicación del contrato de mantenimiento de la red municipal de transmisiones del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo.

De los antecedentes que obran en el expediente resulta:

1. Con fecha 12 de febrero de 2018, el Comisario Principal Jefe de la Policía Local emite informe (“vista providencia de Intervención General sobre informe de fecha 12 de diciembre de 2017”) en el que expone que “por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13 de mayo de 2016 se adjudicó el contrato” a “por un periodo de 5 meses, desde el 16-05-2016 (fecha de recepción de la notificación del acuerdo) hasta el 16-10-2016, por un importe de 21.538 euros./

Según acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21 de octubre de 2016, se le adjudica un nuevo contrato (...) por un periodo de 5 meses, desde el 25-10-2016 (fecha de recepción de la notificación del acuerdo) hasta el día 25-03-2017, y por un importe de 21.659 euros./ Durante los periodos que van desde el 16-10-2016, fecha de finalización del (primer contrato) y el 25-11-2016 (*sic*), comienzo (del nuevo), así como desde el 25-03-2017, finalización de este y el 24-07-2017, fecha en la que se realizó la firma del actual contrato, la reparación y mantenimiento de las transmisiones no estaba cubierta, motivo por el que, para la correcta prestación del servicio, tanto en Policía Local como Bomberos y Protección Civil, se contactó con la empresa (...) para que continuara con el servicio para garantizar las comunicaciones en el Área, accediendo a ello en las mismas condiciones que regían el contrato que tenían adjudicado hasta esas fechas./ De acuerdo con esto, la empresa (...) presenta las facturas que se indican a continuación y que corresponden a los periodos en los que prestó el servicio prorrogando los respectivos contratos, las cuales, una vez conformadas, se remiten al Servicio de Gestión Económica para reconocimiento de deuda”, precisando que se trata de las facturas por importes de 1.126,16 €, que corresponde al periodo del 17-10-2016 al 24-10-2016, y de 17.098,80 €, por el comprendido entre el 26-03-2017 y el 24-07-2017, ascendiendo la cantidad total cuyo reconocimiento se propone a 18.224,96 €.

2. El día 14 de febrero de 2018, la Adjunta a la Jefa de la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento de Oviedo y el titular del Servicio elaboran un informe en el que indican que “por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2016 se adjudica el contrato menor de mantenimiento de la red de transmisiones del Área de Seguridad Ciudadana” a la empresa, “siendo el plazo de ejecución de cinco meses”, y que “por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de octubre de 2016 se adjudica el contrato menor de mantenimiento de la red de comunicaciones del Área de Seguridad Ciudadana” a la misma empresa y por idéntico plazo. Añaden que “por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de junio de 2017 se adjudica el contrato de servicio de mantenimiento de la red

de transmisiones y elementos asociados del Área de Seguridad Ciudadana” a otra empresa, formalizándose el correspondiente contrato “con fecha 25 de julio de 2017”.

Explican que “las facturas que ahora se tramitan corresponden al concepto de servicios de mantenimiento de la red de comunicaciones de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos en los periodos comprendidos desde el 17-10-16 al 24-10-2016 y desde 26 de marzo de 2017 al 24 de julio de 2017 (ambos inclusive), es decir, a periodos comprendidos entre las mencionadas adjudicaciones, y por lo tanto no están amparadas por un contrato./ Según expone el responsable del contrato, se prestaron por la empresa dichos servicios de mantenimiento para garantizar las comunicaciones en el Área, accediendo a ello en las mismas condiciones que regían el contrato que tenían adjudicado hasta esas fechas./ Por tanto, y conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015 procedería -salvo mejor criterio- que por la Junta de Gobierno se inicie el procedimiento de revisión de oficio del contrato verbal del que se derivan las facturas incluidas en el presente expediente”.

3. Con fecha 19 de febrero de 2018, el Adjunto al Interventor del Ayuntamiento de Oviedo emite informe en el que concluye que “no procede en este caso acudir directamente a la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos, puesto que en la tramitación seguida se aprecia la posible concurrencia de un supuesto de nulidad radical conforme al apartado b) del artículo 32 (del) TRLCSP que determinaría, en aplicación del artículo 35 del TRLCSP, la nulidad del contrato./ Por tanto, tal y como señala la Oficina Presupuestaria en su informe, y conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, procede que por la Junta de Gobierno se inicie el procedimiento de revisión de oficio del contrato verbal del que se derivan las facturas indicadas”.

Razona que “el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), regula en su artículo 31 y siguientes el régimen de invalidez de los contratos. Así, señala que serán inválidos los contratos de las Administraciones

públicas cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación cuando concurra alguna de las causas que se señalan en los artículos siguientes./ El artículo 32” contempla “las causas de nulidad de los contratos señalando, junto a otras, las previstas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, referencia que ahora ha de entenderse realizada al artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme a la disposición final cuarta de la Ley 39/2015. Este artículo 47 de la Ley 39/2015 se refiere, como causas de nulidad, junto a otras, a la ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para dictar los actos. También es cierto que para que pueda apreciarse esta causa de nulidad la jurisprudencia ha reiterado que la misma ha de ser clara, manifiesta y ostensible, lo que sucede en los casos de ausencia total del trámite”.

4. En sesión celebrada el 9 de noviembre de 2018, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oviedo, a propuesta de la Concejalía de Gobierno de Seguridad Ciudadana, acuerda declarar la “caducidad” del procedimiento de revisión de oficio iniciado e incoar un nuevo expediente de revisión de oficio de los “contratos verbales de Seguridad Ciudadana”. Se transcribe la propuesta suscrita al efecto, en la que consta que desde el “acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2018”, por el que “se incoó expediente de revisión de oficio de los contratos verbales para el mantenimiento de la red municipal de transmisiones del Área de Seguridad Ciudadana” en las fechas indicadas, “no existe constancia en el expediente administrativo creado al efecto (...) de su remisión al Consejo Consultivo del Principado de Asturias a efecto de que evacuase informe preceptivo”, y se acuerda incorporar al mismo “los antecedentes del expediente caducado”.

Consta la notificación del referido acuerdo a la interesada el 13 de noviembre de 2018 con indicación de que, de conformidad con “lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone de manifiesto el expediente al interesado para su examen por un periodo de 10 días”.

En fecha que no consta, “la Instructora del expediente” extiende diligencia en la que hace constar que, transcurrido el plazo de diez días concedido, la empresa interesada no ha presentado alegaciones.

5. El día 31 de enero de 2019, una Abogada Consistorial que actúa “en sustitución del titular de la Asesoría Jurídica” emite informe en el que señala que “por la Intervención General en 19 de febrero de 2018 se formula reparo a la tramitación del expediente extrajudicial (...), toda vez que en la tramitación seguida se aprecia la posible concurrencia de un supuesto de nulidad radical”, añadiendo que “de acuerdo con el informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Oviedo se aprecia la concurrencia de un supuesto de nulidad radical conforme al art. 47.1.e) de la Ley 39/2015 (...). Por ello, una vez desistido del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos” que cita, “e informado por esta Asesoría Jurídica el expediente, debe continuarse el procedimiento de revisión de oficio de los contratos verbales de los que se deriven las facturas indicadas, pasando a dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, previo a la declaración de nulidad, siendo objeto de liquidación posterior una vez firme, habida cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

6. Con fecha 8 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Concejalía de Gobierno de Seguridad Ciudadana, acuerda “remitir el expediente al Consejo Consultivo del Principado de Asturias solicitando su preceptivo dictamen previo a la declaración de nulidad de la referida contratación verbal, notificando” a la mercantil “la suspensión del plazo para resolver”.

Este acuerdo se notifica a la interesada el 11 de febrero de 2019.

7. En este estado de tramitación, mediante escrito de 27 de febrero de 2019, esa Alcaldía solicita al Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta preceptiva relativa a la revisión de oficio de los contratos verbales para el mantenimiento de la red municipal de transmisiones del Área de Seguridad Ciudadana.

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes consideraciones fundadas en derecho:

PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo según lo dispuesto en el artículo 13.1, letra I), de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra I), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a solicitud de la Alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apartado b), y 40.1, letra b), de la Ley y del Reglamento citados, respectivamente.

SEGUNDA.- Atendiendo a lo dispuesto en el capítulo I del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), el Ayuntamiento de Oviedo se halla debidamente legitimado en cuanto autor de las actuaciones cuya declaración de nulidad es objeto de este procedimiento de revisión de oficio.

TERCERA.- En cuanto al plazo para proceder a la revisión de oficio, el artículo 106.1 de la LPAC dispone que las “Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado (...), declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1”.

No obstante, el artículo 110 de la referida LPAC establece que la revisión de oficio no podrá ser ejercitada “cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. En el caso que examinamos entendemos que no concurre en el procedimiento ninguno de los límites señalados.

CUARTA.- En relación con la tramitación del procedimiento administrativo de revisión de oficio, debe recordarse que esta se configura como un instrumento de garantía de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, lo que exige un estricto cumplimiento de los preceptos legales reguladores del mismo. Por ello, hemos de analizar en primer lugar si se cumplen o no sus trámites fundamentales.

En el presente caso se han observado los trámites esenciales del procedimiento, puesto que se ha dado audiencia y vista del expediente a la mercantil interesada, se ha adoptado un acuerdo de iniciación y se ha elaborado una propuesta de resolución que responde a la obligación legal de motivación, impuesta específicamente para este tipo de procedimientos en el artículo 35.1.b) de la LPAC.

Se aprecia, asimismo, que al procedimiento de revisión de oficio sometido a nuestra consideración precedió otro tramitado con el mismo objeto y cuya caducidad fue declarada el día 9 de noviembre de 2018, fecha en la que se inició el actual, y al que se incorporan los informes emitidos por la Oficina Presupuestaria y la Intervención municipal. Ahora bien, se aprecia que no se ha unido al expediente el preceptivo informe de Secretaría previsto en el artículo 3.3.d).3.º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional; no obstante, obra en la documentación un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Oviedo que entendemos ha sido emitido al amparo y de conformidad con lo establecido para los municipios de gran población en la disposición adicional cuarta del referido Real Decreto, dando

satisfacción de esta manera a las exigencias legales de motivación en relación a tal requisito.

Por otra parte, advertimos que no se ha dado cumplimiento a la obligación de comunicar a la empresa interesada, en los términos de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la LPAC, el plazo máximo legalmente establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

Sobre la competencia del órgano administrativo para acordar la revisión de oficio, la LPAC no realiza una atribución concreta, limitándose a hacer una referencia al “órgano competente”. Por ello, y tratándose de una Administración local, hemos de acudir al régimen establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. El artículo 127 de la LRBRL, aplicable a los municipios de gran población, atribuye a la Junta de Gobierno Local las “facultades de revisión de oficio de sus propios actos” -apartado 1.k)-. En idéntico sentido, el artículo 218 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, otorga la competencia al órgano municipal respectivo en relación con sus propios actos, estableciendo que, sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, “los órganos de las entidades locales podrán revisar sus actos, resoluciones y acuerdos, en los términos y con el alcance que se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común”. A su vez, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), determina en su disposición adicional segunda -“Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales”-, apartado 4, que en “los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del

contrato o la duración del mismo”, manteniendo así la regla establecida por su predecesora, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, aplicable al presente supuesto si tenemos en cuenta el momento en que se producen los actos objeto de revisión, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la LCSP, tanto en su apartado 1 -“Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se registrarán por la normativa anterior”- como en el 2 -“Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se registrarán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”-.

Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 106.5 de la LPAC, los procedimientos de revisión de disposiciones o actos nulos deberán resolverse en el plazo de seis meses desde su inicio, transcurridos los cuales sin dictarse resolución, si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, se producirá su caducidad. Dado que el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oviedo de incoación del procedimiento se adoptó el 9 de noviembre de 2018, y la Administración municipal ha utilizado la posibilidad de suspender el transcurso de dicho plazo de resolución hasta la emisión de dictamen por este Consejo (si bien el plazo máximo de suspensión no puede exceder de 3 meses), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.1.d) de la LPAC, el cómputo del plazo deberá reanudarse el día de recepción de este dictamen.

QUINTA.- Entrando en el fondo del asunto, para la correcta valoración del supuesto que analizamos debemos partir de una consideración de tipo general, y es que la revisión de oficio, regulada en el capítulo I del título V de la LPAC, constituye un procedimiento excepcional, puesto que este instrumento sitúa a la Administración en una posición de privilegio, al poder por sí misma, sin

intervención judicial y en cualquier momento, revisar disposiciones y actos suyos viciados de nulidad.

En el asunto examinado se somete a dictamen un procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación verbal del contrato del servicio de mantenimiento de la red municipal de transmisiones del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo en dos periodos diferenciados, correspondientes a los comprendidos entre la finalización de dos contratos cuyo objeto era la prestación de ese servicio y el inicio de los formalizados con el mismo propósito. Según se expone en el informe del Servicio responsable, suscrito con fecha 12 de febrero de 2018 por el Comisario Principal Jefe de la Policía Local, las prestaciones realizadas sin cobertura contractual permitieron el mantenimiento del servicio, cuya continuidad era necesaria.

De acuerdo con los informes emitidos por la Oficina Presupuestaria y la Intervención municipal, resulta improcedente acudir de plano al reconocimiento extrajudicial de créditos para el abono de las dos facturas emitidas por la mercantil que prestó los servicios de mantenimiento de la red municipal de transmisiones del Área de Seguridad Ciudadana en los periodos indicados en cada una de ellas. Ambos informes concluyen que el procedimiento a aplicar ha de ser el de la revisión de oficio establecido en el artículo 106 de la LPAC con carácter previo a la aplicación del artículo 35 del TRLCSP, aplicable aquí *ratione temporis*.

En efecto, como ya hemos señalado en ocasiones anteriores (por todos, Dictamen Núm. 54/2019), tras la entrada en vigor del artículo 35 del TRLCSP la previa declaración de nulidad constituye la vía específica y adecuada para compensar al contratista que actúa de buena fe; norma legal que, según expone el Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, puso fin a la controversia jurisprudencial y doctrinal sobre el posible origen, contractual o extracontractual, de las obligaciones que habría de asumir la Administración en estos casos para evitar el resultado antijurídico de la apropiación de unos servicios sin compensar al contratista. En la esfera local ha de considerarse además la facultad que el artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de

abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, confiere al órgano interventor a los efectos de pronunciarse sobre la posibilidad o conveniencia de proceder a la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del procedimiento.

También hemos establecido que, con carácter general, este tipo de actos de contenido obligacional que se presumen irregulares pueden ser catalogados de dos formas distintas, bien como una prórroga (ilegal) de un contrato anterior extinguido, bien como un contrato verbal menor nuevo aparentemente desvinculado de otro anterior del que, sin embargo, constituye una réplica, en la medida en que sus características esenciales (prestaciones, precio, condiciones, etc.) se enuncian por referencia a él.

En el caso que nos ocupa, de la propuesta de resolución se desprende que la nulidad instada se basa en la prohibición de la contratación verbal, en cuanto que incurre en el supuesto establecido en el artículo 47.1.e) de la LPAC por ausencia total del procedimiento. Ahora bien, según reiterada jurisprudencia, para que pueda apreciarse esta causa de nulidad la omisión del procedimiento ha de ser “clara, manifiesta y ostensible”, lo que sucede, entre otros, en los casos de “ausencia total de trámite” (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2006 -ECLI:ES:TS:2006:2789-, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª).

En el asunto examinado se aprecia, sin embargo, una contradicción en los informes emitidos, ya que si bien, a tenor de las cuantías de los contratos formalizados (entre los que se intercalan los periodos facturados sin contratación), referidas en el suscrito por el Jefe de la Policía Local (antecedente de hecho primero), no sería posible la calificación como contratos menores que expresamente les atribuye el informe de la Oficina Presupuestaria (antecedente de hecho segundo), los restantes elementos que constan -tanto su duración (cinco meses) como el hecho de que no se hubiera formalizado la prórroga legalmente admisible en caso de los contratos de servicios, a la que, en buena lógica, habría recurrido el órgano de contratación en caso de ser posible- avalarían su calificación como contratos menores. Por otro lado, pese a

desconocerse el precio de adjudicación de los contratos, llama la atención la sucesiva adjudicación de dos contratos menores a la misma empresa (que es, a su vez, la que prestó los servicios contratados verbalmente), siendo evidente que por su propia naturaleza este tipo contractual sirve para satisfacer necesidades de carácter puntual y no de carácter recurrente, periódico o permanente, como las que constituyen el objeto de las contrataciones que nos ocupan. Al respecto, debe recordarse que el artículo 86.2 del TRLCSP, vigente en el momento de las adjudicaciones, no permitía fragmentar el contrato “con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. Con el mismo objetivo, la regulación del contrato menor que establece la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, trata de evitar prácticas constitutivas de fraccionamiento indebido del contrato, y a tal efecto su artículo 118.3 dispone que “En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero” de este artículo (“15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”), salvo que constituya uno de “los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º”.

En el presente caso, el análisis de lo actuado revela que la Administración procedió a prorrogar *de facto*, en sus mismas condiciones económicas, dos contratos menores de servicios que se habían extinguido al finalizar su plazo de duración y que no podían prorrogarse legalmente por prohibirlo el artículo 23.3 del TRLCSP, a cuyo tenor “Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”. Los contratos se adjudicaron, por tanto, sin seguir ninguno de los procedimientos previstos al efecto en el artículo 138 del TRLCSP. Por ello, en este supuesto resulta evidente que se ha omitido, de forma clara, manifiesta y ostensible, el procedimiento legalmente exigible.

Conviene especificar que idéntica solución se alcanzaría partiendo de la hipótesis de que los contratos formalizados no fueran menores, de acuerdo con los importes mencionados en el informe del Jefe de la Policía Local. En tal caso, y en relación con la primera de las facturas emitidas, pese a su importe (1.126,16 €), no procedería su calificación como contrato menor dado que el valor estimado del contrato de servicios no puede calcularse al margen de lo dispuesto en el artículo 88.5 del TRLCSP, a cuyo tenor en los supuestos de prestaciones de carácter periódico se tomará en consideración el importe imputable a 12 meses. Por ello, partiendo de que el artículo 28 del TRLCSP proscribire la contratación verbal, y puesto que el nuevo contrato no cumple con la definición de un menor, se habrían eludido, además de la falta de adjudicación por el órgano de contratación, las formalidades para su tramitación por los procedimientos previstos al efecto en el propio TRLCSP; esto es, los contemplados en su artículo 138 -procedimiento abierto o restringido-, y esencialmente las obligaciones de publicidad y concurrencia.

Y en lo referente a la segunda de las prestaciones (a la que corresponde la factura por importe de 17.098,80 €), en caso de que hubiera sido posible una prórroga, esta no se formalizó, vulnerando por tanto la exigencia de acuerdo expreso del órgano de contratación que resulta del último párrafo del artículo 23.2 del TRLCSP, que dispone que la "prórroga se acordará por el órgano de contratación (...), sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes"; supuesto en el que, como ya señalamos en el Dictamen Núm. 18/2018, concurre la causa de nulidad radical establecida en el apartado e) del artículo 47.1 de la LPAC. Por último, la misma conclusión que acabamos de exponer en relación con el primer periodo facturado resultaría de considerar que en el segundo el Ayuntamiento ha procedido a suscribir un nuevo contrato, no una prórroga del anterior ya extinguido, caso en el que debe reiterarse que, dado que el nuevo contrato no cumple con la definición de un menor, se habrían eludido, además de la falta de adjudicación por el órgano de contratación, las formalidades para su tramitación por los procedimientos previstos al efecto en el propio TRLCSP antes citados con referencia a su artículo 138.

En definitiva, este Consejo estima que, por las razones expuestas, concurre el supuesto de nulidad radical establecido en el apartado e) del artículo 47.1 de la LPAC en la adjudicación verbal seguida que permitió la prestación de los servicios una vez finalizados los dos contratos a los que se vinculaba.

Ahora bien, lo anterior no impide reiterar, como ya advertimos en el Dictamen Núm. 29/2018, dirigido a la misma autoridad consultante, la necesidad de evitar la repetición de prácticas irregulares como las que suscita la actual revisión de oficio. A tal fin, en la actualidad el artículo 29.4, párrafo quinto, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone que “cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario”.

Finalmente, en cuanto a los efectos de la declaración de nulidad, ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 35.1 del TRLCSP; regulación que constituye aquí el cauce legal específico para garantizar los derechos de quien hubiera prestado servicios a la Administración en unas condiciones como las examinadas. El artículo citado prescribe que la “declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios

que haya sufrido”. Todo ello sin perjuicio además de las responsabilidades que pudieran derivarse para funcionarios y autoridades (disposición adicional decimonovena del TRLCSP).

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictamina que procede revisar de oficio y declarar la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos de adjudicación a la empresa de los contratos del servicio de mantenimiento de la red municipal de transmisiones del Área de Seguridad Ciudadana durante los periodos comprendidos entre las fechas 17 y 24 de octubre de 2016 y 26 de marzo y 24 de julio de 2017.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Gijón, a

EL SECRETARIO GENERAL,

V.º B.º

LA PRESIDENTA,

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.